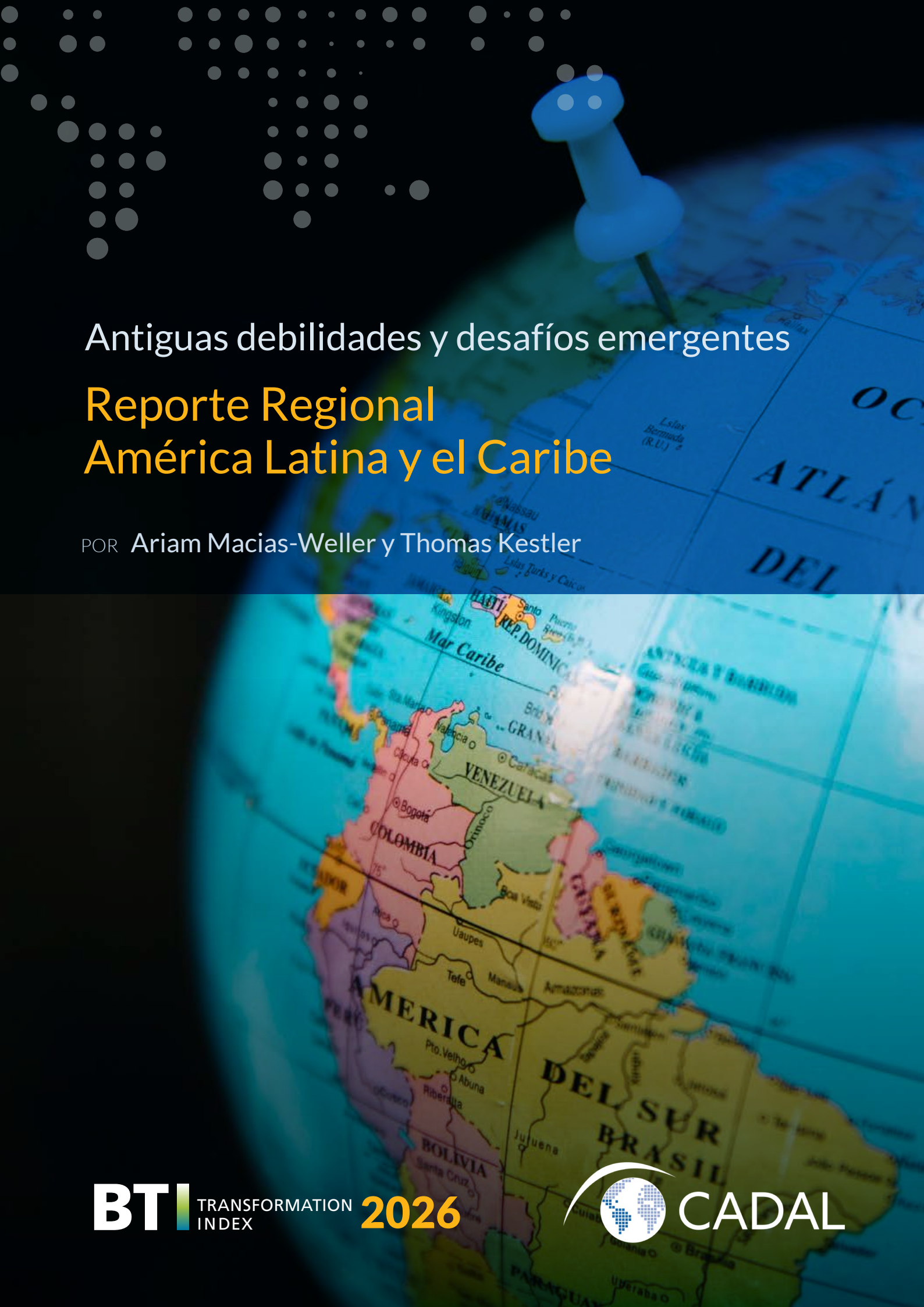




Antiguas debilidades y desafíos emergentes

Reporte Regional América Latina y el Caribe

POR Ariam Macias-Weller y Thomas Kestler



Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256
33311 Gütersloh - Germany
Teléfono: +49 5241 81-0
www.bertelsmann-stiftung.de

Este trabajo está bajo una licencia Creative Commons
Attribution 4.0 International.



Los logotipos de esta publicación están protegidos
por derechos de autor, pero no están sujetos a licencias
CC y, por lo tanto, no pueden utilizarse, distribuirse
ni adaptarse sin el consentimiento por escrito de
Bertelsmann Stiftung.

Se ruega citar de la siguiente manera:
Macias-Weller, Ariam y Kestler, Thomas,
Antiguas Debilidades y Desafíos Emergentes.
Informe Regional BTI América Latina y el Caribe.
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung 2026.

Para más información, consulte www.bti-project.org.

Antiguas debilidades y desafíos emergentes

Reporte Regional América Latina y el Caribe

Por **Ariam Macias-Weller** y **Thomas Kestler***

PANORAMA GENERAL DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EN ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CUBA, REPÚBLICA DOMINICANA, ECUADOR, GUATEMALA, HAITÍ, HONDURAS, JAMAICA, MÉXICO, NICARAGUA, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY Y VENEZUELA.

ESTE INFORME REGIONAL ANALIZA LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN BTI 2026 DE BERTELSMANN STIFTUNG PARA EL PERÍODO DE REVISIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2023 Y EL 31 DE ENERO DE 2025.

Traducción: Amani Horton y Dorothea Krueger

* Ariam Macias-Weller es consultora independiente y Coordinadora Regional del BTI para América Latina y el Caribe. El PD Dr. Thomas Kestler es investigador en el Instituto de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Würzburg y Coordinador Regional del BTI para América Latina y el Caribe.



América Latina y el Caribe

Antiguas debilidades y desafíos emergentes

Aunque la democracia sigue siendo valorada en términos normativos por las sociedades de América Latina y el Caribe, la frustración frente a sus disfunciones genera un terreno propicio para el avance de movimientos populistas. A ello se suman los desafíos derivados de la fragmentación de los sistemas de partidos y de una polarización creciente, que con frecuencia se traducen en bloqueos institucionales o desequilibrios de poder.

Introducción

La transformación democrática y económica, así como la calidad de la gobernanza en América Latina y el Caribe, no mostraron una tendencia pronunciada durante el período de revisión. La calidad democrática disminuyó ligeramente (-0,09), mientras que los indicadores económicos (+0,02) y de gobernanza (+0,03) mostraron mejoras muy modestas. Si bien la mayoría de los países han dejado atrás las convulsiones de la crisis de la COVID-19, están surgiendo nuevos riesgos y desafíos. El malestar social y las presiones económicas inmediatas han disminuido hasta cierto punto, dando paso a una situación de relativa calma. En general, los acontecimientos desde febrero de 2023 demuestran estancamiento o continuidad, dependiendo de la perspectiva. Sin embargo, un examen más detenido de los criterios individuales revela tanto desarrollos divergentes como áreas de continuidad.

En lo que respecta a la transformación democrática, destacan como avances positivos la realización de varios

procesos electorales pacíficos y en términos generales limpios, así como la superación de crisis postelectorales tanto en Brasil como en Guatemala. Tras un período de intensa movilización social, los conflictos políticos y sociales pudieron, en parte, evitarse y canalizarse por vías institucionales en Bolivia, Chile y Ecuador. En conjunto, las instituciones democráticas cumplen con sus funciones básicas, aunque los avances hacia una democracia liberal han sido limitados. Al mismo tiempo, los regímenes autoritarios de la región no solo no mostraron señales de apertura, sino que en algunos casos profundizaron su carácter represivo, especialmente en El Salvador (-0,30) y Nicaragua (-0,28). No obstante, el éxito del gobierno de Bukele en la contención de la violencia de las pandillas y en la mejora de la seguridad pública es ampliamente reconocido, lo que ha incrementado el atractivo del populismo punitivo en toda la región. Aunque la democracia sigue siendo valorada en términos normativos por las sociedades de América Lati-

na y el Caribe, la frustración frente a sus disfunciones genera un terreno propicio para el avance de movimientos populistas. A ello se suman los desafíos derivados de la fragmentación de los sistemas de partidos y de una polarización creciente, que con frecuencia se traducen en bloqueos institucionales o desequilibrios de poder.

Paralelamente, el desarrollo económico muestra un marcado estancamiento. En la mayoría de los países, los fundamentos macroeconómicos, como los sistemas bancarios y las cuentas fiscales, son relativamente sólidos, y la inflación se mantiene en general bajo control. Sin embargo, la productividad continúa siendo baja y persisten elevados niveles de informalidad, pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso. Tras un breve periodo de recuperación posterior a la pandemia, las tasas de crecimiento volvieron a niveles modestos en la mayoría de los países: el crecimiento promedio de la región fue del 2,09% en 2023 y del 2,4% en 2024, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Aún no se vislumbra un cambio de rumbo respecto de la tendencia descendente que se arrastra desde el fin del auge de las materias primas. Al mismo tiempo, los riesgos económicos se intensificaron de manera significativa en algunos países (por ejemplo, Bolivia, Colombia, El Salvador y, especialmente, Cuba), como consecuencia del aumento de los déficits, la caída de los ingresos por exportaciones y la dependencia de las remesas. En términos generales, el desempeño económico guarda una estrecha relación con el grado de transformación política: los países democráticos tienden a mostrar mejores resultados económicos, mientras que la mayoría de los regímenes autoritarios –como Cuba, Haití y Venezuela– se caracterizan por profundas dificultades económicas. En toda la región, la transformación económica en ámbitos como la organización de los mercados (+0,02), los derechos de propiedad (-0,02) y los regímenes de bienestar (-0,07) permanece en gran medida estancada. Persisten además serios problemas en materia de desarrollo sostenible, ya que muchos países priorizan los intereses económicos por encima de las consideraciones ambientales. La calidad de la educación y el nivel de inversión en investigación y desarrollo son en general bajos, lo que limita las perspectivas de crecimiento a futuro.

La estrategia de desarrollo predominante en América Latina y el Caribe puede caracterizarse, en términos generales, como fragmentada y reactiva, fuertemente condicionada por los ciclos políticos, los factores externos y las presiones sociales.

La estrategia de desarrollo predominante en América Latina y el Caribe puede caracterizarse, en términos generales, como fragmentada y reactiva, fuertemente condicionada por los ciclos políticos, los factores externos y las presiones sociales. Muchos países se han alejado de modelos económicos rígidos y, en su lugar, buscan de manera pragmática equilibrar el crecimiento, la inclusión social y la estabilidad macroeconómica. Los gobiernos de orientación progresista en Chile, Colombia y México no han desmantelado de forma generalizada las políticas favorables al mercado, sino que han intentado articular los objetivos de inclusión social con la estabilidad económica. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina en 2023, cobró protagonismo un modelo marcadamente liberal basado en la austeridad fiscal y la desregulación, cuya viabilidad, no obstante, aún está por demostrarse. En términos generales, América Latina y el Caribe muestran una notable divergencia en sus trayectorias de desarrollo y, en la mayoría de los casos, carecen de enfoques de largo plazo y de estrategias coordinadas, lo que dificulta el crecimiento y desarrollo sostenidos.

Un panorama igualmente desigual se desprende de los indicadores de gobernanza, que en el nivel agregado se han mantenido prácticamente estables tras varios años de deterioro sostenido. Muchos países, en particular en Centroamérica, continúan enfrentando graves restricciones estructurales y vulnerabilidades, entre ellas la pobreza extrema, la criminalidad, los bajos niveles educativos y los riesgos derivados de su ubicación geográfica, que los hace especialmente expuestos a los efectos del cambio climático. A ello se suma la ausencia de estructuras adecuadas que faciliten el aprendizaje de políticas y la coordinación institucional, lo que a menudo conduce a un uso ineficiente de los recursos disponibles. En los niveles más bajos de la escala se encuentran los regímenes autocráticos –Venezuela (1,57), Nicaragua (2,61) y Haití (2,62)–, que presentan los peores desempeños en materia de gobernanza (véase el Cuadro 4). En contraste, un conjunto de países, en su mayoría del Cono Sur, ha alcanzado altos niveles de calidad gubernamental, reflejados en una implementación eficaz de políticas públicas y en procesos de reforma administrativa exitosos. Un caso destacado es Brasil (+1,89), donde el estilo de gobierno errático y con-

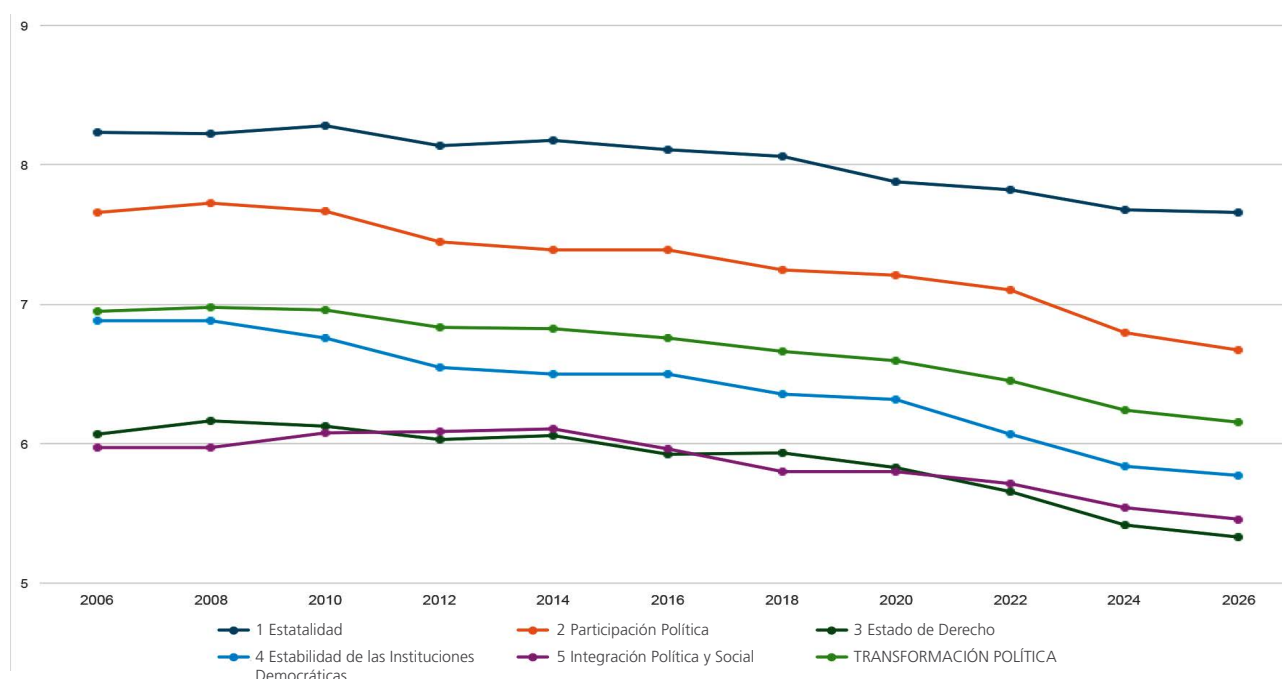
frontacional de la administración Bolsonaro ha sido sustituido por una forma de gobernanza más constructiva, y las principales agencias estatales han recuperado su funcionamiento. Sin embargo, persisten graves deficiencias en la lucha contra la corrupción, atribuibles a marcos institucionales insuficientes y a la acción de actores criminales que socavan al poder judicial y a las fuerzas de seguridad del Estado. Diversos casos de alto perfil ponen de manifiesto los vínculos entre el crimen organizado y actores estatales, incluidos el poder ejecutivo y los niveles más altos del sistema judicial. Pese a los esfuerzos relevantes en materia de lucha contra la corrupción, la aplicación selectiva de la ley y la rendición de cuentas inconsistente continúan erosionando el Estado de derecho y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Transformación Política

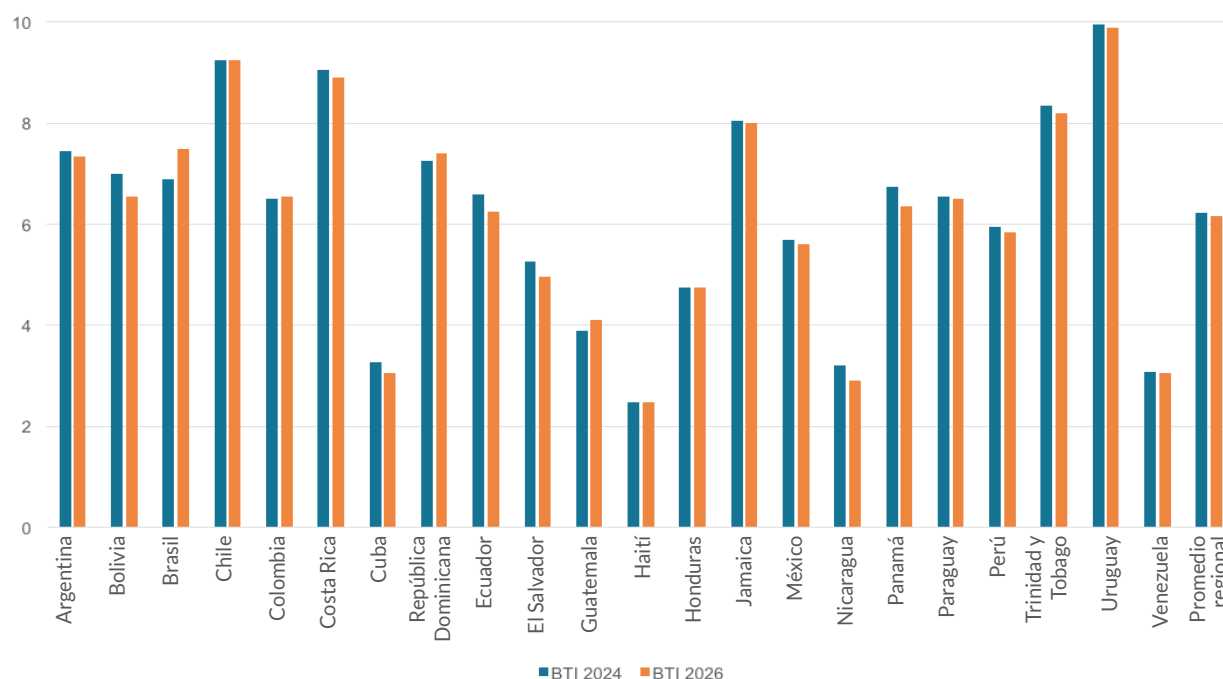
A nivel agregado, la estructura institucional básica de las democracias en América Latina y el Caribe muestra una notable capacidad de resiliencia y mantiene un funcionamiento relativamente adecuado. Sin embargo, en su conjunto, la democracia tiende al deterioro, especialmente en ámbitos como la competencia partidaria, la mediación de intereses y el Estado de derecho (véase la Figura 1). Durante el periodo analizado, la participación política y el Estado de derecho registraron las caídas más pronunciadas, con

descensos de -0,15 y -0,10, respectivamente. Los demás criterios de transformación política también mostraron retrocesos, aunque de menor magnitud, con valores que oscilan entre -0,07 y -0,02. En general, durante el periodo de referencia apenas se observaron avances significativos hacia la consolidación democrática en la región. La mayoría de los países se mantuvo estancada o experimentó una leve disminución en la calidad democrática (véase la Figura 2). Brasil constituye una excepción positiva, al haber recuperado los niveles democráticos previos tras el periodo turbulento del gobierno de Bolsonaro, con mejoras destacadas en la calidad de la participación política (+1,0) y del Estado de derecho (+0,8). También se registraron avances modestos en Guatemala (+0,20), la República Dominicana (+0,15) y, en menor medida, en Colombia (+0,05), principalmente como resultado de un cambio o la continuidad de liderazgos políticos orientados a las normas democráticas y comprometidos con las instituciones y los procesos democráticos. No obstante, en la mayoría de los países la calidad democrática se ha deteriorado. Las pérdidas más significativas a nivel de indicadores se observan en el funcionamiento de los sistemas de partidos (-0,28) y en la libertad de expresión (-0,23). Debilidades estructurales persistentes, combinadas con nuevos desafíos internos y externos –como el aumento de la inseguridad, la influencia del trumpismo y las incertidumbres geopolíticas–, continúan obstaculizando la transformación política.

Figura 1 Transformación política en América Latina y el Caribe: BTI 2006–2026*



* Nota: incluye a Trinidad y Tobago a partir del BTI 2020.

Figura 2 Transformación política en América Latina y el Caribe: BTI 2024 vs. BTI 2026

El deterioro más pronunciado de la democracia se produjo en la autocracia moderada de El Salvador, donde la participación política sufrió un retroceso especialmente significativo (-1,0). Nayib Bukele dio inicio al llamado “superciclo electoral” de 2024 en la región y obtuvo una victoria abrumadora, con aproximadamente el 83% de los votos, asegurándose así un segundo mandato. Si bien su triunfo electoral fue en gran medida aceptado por los observadores internacionales, su candidatura y posterior reelección fueron ampliamente cuestionadas debido a su carácter inconstitucional. En la autocracia de línea dura de Venezuela, el proceso electoral estuvo marcado por irregularidades, y abundantes pruebas indicaron que el candidato oficialista, Nicolás Maduro, había perdido por un amplio margen. A pesar de ello, el organismo electoral lo declaró ganador sin publicar los resultados desagregados, llevando el fraude electoral a un nuevo extremo.

Más allá de estos episodios, el régimen electoral funcionó de manera relativamente adecuada en el resto de la región. En los países clasificados como democráticos, la puntuación promedio en materia de elecciones libres y justas es de 8,63 (en una escala de 1 a 10), lo que indica que los comicios competitivos se celebran de forma regular y transparente. En México, las elecciones históricas de 2024 permitieron al partido gobernante, Morena, mantenerse

en el poder. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta del país, al obtener alrededor del 61% de los votos y el mayor número de sufragios jamás registrado para una candidatura presidencial, imponiéndose en 31 de los 32 estados. En las elecciones legislativas, la alianza Sigamos Haciendo Historia alcanzó la mayoría en el Senado y obtuvo la mayor proporción de escaños (300 de 500) para un partido o coalición en la Cámara de Diputados desde 1982. Los partidos oficialistas también lograron la victoria en Paraguay y en la República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader ha mostrado avances tangibles desde su llegada al poder en 2020, especialmente en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la reconstrucción de instituciones democráticas estables. La República Dominicana se perfila así como un ejemplo promotor de recuperación democrática en un contexto regional marcado por retrocesos. En Uruguay, el Frente Amplio, de centroizquierda, regresó al gobierno tras derrotar por un estrecho margen al bloque conservador en las elecciones generales de octubre de 2024. El electorado también optó por un cambio de gobierno en Guatemala, Argentina, Ecuador y Panamá. En el caso guatemalteco, las elecciones se celebraron en un contexto de fuerte polarización política y, aunque fueron consideradas suficientemente libres y competitivas, estuvieron atravesadas por tensiones legales e institucionales. En el periodo posterior a los comicios, el Ministerio Público intentó en varias ocasiones, sin éxito,

anular los resultados y bloquear la asunción del presidente electo Bernardo Arévalo, del movimiento de centroizquierda Semilla, lo que generó inestabilidad política. En Argentina, el outsider libertario Javier Milei se impuso en la segunda vuelta de noviembre de 2023, poniendo fin al patrón bipolar de competencia entre peronistas y conservadores. En todos estos casos, los resultados electorales fueron aceptados por los partidos y candidatos derrotados, incluso en contextos de alta conflictividad y polarización política. Cuando correspondía, los límites constitucionales a la reelección fueron respetados por los gobernantes salientes, algo que no siempre puede darse por sentado en la región.

Si bien las instituciones electorales demostraron en general una notable capacidad de resistencia, se hicieron evidentes graves deficiencias en otros indicadores de participación política, en particular en la libertad de expresión y en los derechos de asociación y de reunión. En el ámbito de la libertad de expresión, los países con las puntuaciones más bajas y con mayores retrocesos durante el periodo analizado fueron Haití y El Salvador. En Haití, el entorno para el ejercicio del periodismo se volvió aún más precario y peligroso como consecuencia del agravamiento de la falta de control estatal en amplias zonas del país y de la ausencia de protección policial, y según el Índice Global de Impunidad 2024 del Comité para la Protección de los Periodistas, el país ocupa el primer lugar en permitir que los asesinatos de periodistas queden impunes. En El Salvador, aunque los medios independientes como El Faro y La Prensa Gráfica continúan informando de forma crítica sobre el gobierno, las auditorías de carácter punitivo, el hostigamiento persistente y los ataques directos dificultan seriamente el cumplimiento de su función de control, lo que ha llevado a muchos periodistas a autocensurarse por temor a represalias. Ante la previsión de un mayor endurecimiento del acoso y de las restricciones, algunos medios críticos, como *El Faro*, trasladaron sus sedes al extranjero, y en mayo de 2025, poco después del periodo analizado, el gobierno aprobó además la controvertida ley de Agentes Extranjeros, que otorga a la administración amplias facultades para sancionar y disolver a cualquier organización calificada como agente extranjero. En contraste, Brasil fue el único país que registró avances en materia de libertad de expresión, ya que tras la salida de Jair Bolsonaro el presidente Lula restableció relaciones normalizadas entre los

En contraste, Brasil fue el único país que registró avances en materia de libertad de expresión, ya que tras la salida de Jair Bolsonaro el presidente Lula restableció relaciones normalizadas entre los medios de comunicación y las autoridades estatales.

medios de comunicación y las autoridades estatales.

En varios países, los derechos de asociación y de reunión fueron suspendidos como consecuencia de la imposición de estados de excepción, totales o parciales, entre ellos Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago. Ecuador registró el mayor retroceso (-2), a medida que el gobierno intensificó la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública. Este enfoque dio lugar a detenciones masivas y a denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y

el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. En contraste, Brasil y Guatemala registraron mejoras de un punto cada uno. Mientras que el gobierno de Bolsonaro defendió de forma reiterada la violencia policial excesiva contra manifestantes opositores, la nueva administración no impuso restricciones a los derechos de reunión y de asociación. En Guatemala, en 2023 se produjeron protestas en demanda del respeto a los resultados de las elecciones presidenciales, y la presión de la ciuda-

danía y de actores internacionales, en particular de Estados Unidos, condujo finalmente a una transferencia pacífica del poder. Aunque en el pasado la policía recurría con frecuencia a amenazas y al uso de la fuerza contra los manifestantes, este tipo de episodios se ha vuelto menos grave bajo la presidencia de Arévalo, si bien el sistema de justicia continúa orientado a preservar la impunidad y ha emprendido diversas acciones legales contra figuras clave del partido Semilla con el objetivo de debilitar su posición política.

También se observaron graves deficiencias en el Estado de derecho, en particular en lo que respecta a la independencia judicial. En Bolivia, las instituciones judiciales se vieron envueltas en disputas electorales y en rivalidades internas dentro del MAS. La elección popular de jueces para las más altas cortes, introducida por la Constitución de 2009, no ha generado cambios positivos. Por el contrario, existe una percepción generalizada de que los jueces están alineados con el gobierno y fuertemente influidos por grupos de presión vinculados al partido en el poder. En Ecuador, Honduras y Paraguay, el sistema judicial se ve afectado por la corrupción y por amenazas dirigidas a jueces por parte de organizaciones criminales que buscan obtener fallos favorables, especialmente en los niveles in-

feriores del sistema. De manera similar, el poder judicial mexicano padece corrupción generalizada, acumulación de causas e ineficiencias, lo que se traduce en altos niveles de impunidad. Poco antes de dejar el cargo, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador intensificó los esfuerzos para impulsar una serie de reformas judiciales que, según sus críticos, podrían debilitar aún más la independencia y la rendición de cuentas del poder judicial. La reforma más controvertida contempla la elección popular de más de mil cargos judiciales, incluidos los integrantes del tribunal electoral y los ministros de la Suprema Corte. La experiencia boliviana con la elección de jueces invita a la cautela, ya que este mecanismo puede, de manera involuntaria, fomentar la desconfianza pública y profundizar la politización de la justicia. En Guatemala, el Ministerio Público desempeñó un papel central en el debilitamiento de la independencia judicial al utilizar el sistema legal como herramienta para perseguir a opositores políticos, jueces independientes y figuras comprometidas con la lucha contra la corrupción.

La corrupción sigue siendo un problema grave en la región. En promedio, la persecución del abuso de poder es el indicador del Estado de derecho con la puntuación más baja en América Latina y el Caribe, lo que pone de relieve la escasa capacidad para investigar y sancionar adecuadamente a los funcionarios públicos. Durante el periodo analizado, Argentina, Ecuador y Panamá registraron un retroceso de un punto en este indicador, mientras que únicamente la República Dominicana mostró avances. En este último caso, la mejora se explica por la priorización de políticas e iniciativas anticorrupción por parte del gobierno de Abinader, que incluyeron el aumento de recursos para apoyar investigaciones complejas, el nombramiento de figuras ampliamente respetadas en los niveles más altos del Ministerio Público y la decisión del propio Abinader de no interferir en las investigaciones por corrupción, incluso cuando estas involucraban a miembros de su propia administración. En Argentina, en cambio, la corrupción sigue estando muy extendida, especialmente en las provincias periféricas, donde persiste una arraigada cultura de impunidad. En Ecuador, el gobierno socavó activamente los esfuerzos anticorrupción, y en Panamá muchos casos de corrupción ni siquiera llegan a los tribunales. Incluso en los países más democrá-

ticos de la región, como Chile y Uruguay, se producen casos de corrupción de gran escala, aunque por lo general son debidamente investigados y sancionados. En contraste, el abuso de poder es insuficientemente perseguido en Guatemala, México, Paraguay y Trinidad y Tobago. En sistemas autoritarios como Haití, Nicaragua y Venezuela, la corrupción de los funcionarios públicos es endémica y la impunidad constituye la norma.

Una debilidad persistente de las democracias de América Latina y el Caribe radica en la fragilidad de sus sistemas de partidos. En muchos países, estos sistemas presentan bajos niveles de institucionalización, siendo Brasil, Ecuador y Perú los casos más notorios, caracterizados por una elevada volatilidad y una fuerte fragmentación partidaria. En Brasil, la competencia política está fuertemente marcada por apelaciones negativas más que por propuestas programáticas, ya que una proporción considerable del electorado se moviliza principalmente por la hostilidad hacia el Partido de los Trabajadores o hacia el bolsonarismo. En toda la región, los vínculos programá-

ticos entre partidos y votantes son débiles, mientras predominan los liderazgos personalistas y las prácticas clientelares, como ocurre, por ejemplo, en Honduras, México y Paraguay. En Argentina, Ecuador y Panamá, figuras *outsider* de corte personalista han logrado imponerse en elecciones presidenciales. Asimismo, se observa una tendencia creciente a la fragmentación de los sistemas de partidos en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá. En contraste, los sistemas de partidos de El Salvador, México y Paraguay se caracterizan por el predominio de una sola fuerza política, con los dos primeros casos acercándose a un esquema de partido hegemónico, dominado por Nuevas Ideas y Morena, respectivamente. Otro factor que afecta la calidad de la representación partidaria es la polarización, que ha aumentado en Costa Rica, Jamaica y Brasil, donde ha alcanzado niveles preocupantes. En Chile, la polarización se intensificó tras el estallido social de 2019 y se ha mantenido en el tiempo, como lo demuestran los dos intentos fallidos de reforma constitucional en 2022 y 2023.

Otra fuente de posibles disfunciones democráticas se encuentra en la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo. La mayoría de las democracias de la región cuenta con sistemas presidenciales, con distintas distribuciones

En Argentina, Ecuador y Panamá, figuras outsider de corte personalista han logrado imponerse en elecciones presidenciales. Asimismo, se observa una tendencia creciente a la fragmentación de los sistemas de partidos en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá.

de competencias entre ambos poderes. En el pasado, el predominio del ejecutivo fue un patrón recurrente, que en ocasiones adoptó la forma de un hiperpresidencialismo y dio lugar a democracias delegativas de carácter defectuoso. En la actualidad, sin embargo, el panorama es más heterogéneo, ya que en varios países el equilibrio de poder se ha desplazado hacia el legislativo, en particular en Perú y, en menor medida, en Brasil, donde el Congreso recibió amplias facultades presupuestarias durante el gobierno de Bolsonaro como estrategia para evitar un proceso de destitución presidencial.

En conjunto, la transformación hacia la consolidación democrática enfrenta obstáculos considerables. Si bien los niveles de democratización varían ampliamente en América Latina y el Caribe, la mayoría de los países permanece atrapada en la categoría de democracias defectuosas, lo que refleja debilidades persistentes en el Estado de derecho, los sistemas de partidos y la integración política (véase el Cuadro 1). Durante el periodo analizado no se produjeron cambios de régimen hacia la democracia o la autocracia, aunque la trayectoria de Guatemala mostró una mejora. El país pasó de ser clasificado como una autocracia de línea dura a una autocracia moderada, principalmente como resultado de un cambio de liderazgo político a comienzos de 2024. No obstante, graves vulneraciones en el ámbito de los derechos civiles, entre ellas la persecución selectiva y la criminalización de figuras opositoras, activistas y periodistas independientes, así como violacio-

nes generalizadas de los derechos humanos y una impunidad estructural, obstaculizaron avances más sustantivos.

Aunque el panorama general no ha cambiado de manera sustantiva en los últimos años, han surgido diversos riesgos y desafíos, en su mayoría exógenos a los sistemas democráticos. Entre ellos, destacan los altos niveles de criminalidad y la extendida percepción de inseguridad, que ponen en tensión la capacidad estatal y la estabilidad democrática. Si bien estos problemas no son nuevos en la región, el crimen organizado, en muchos casos de carácter transnacional, ha comenzado a afectar también a países que antes eran considerados relativamente seguros, como Chile y Uruguay. Aunque las tasas de homicidio en ambos países siguen siendo bajas en comparación regional, la inseguridad se ha convertido en una preocupación creciente para la ciudadanía.

Según el Instituto Igarapé, seis países de América Latina y el Caribe evaluados por el BTI se ubicaron entre los diez con las tasas de homicidio más altas del mundo en 2023. Jamaica encabezó la lista con 49,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguida de Ecuador con 45,13 y Haití con 40,9, cifras asociadas principalmente a la violencia de pandillas y al narcotráfico. Si bien el dato de Jamaica resulta alarmante, los homicidios han disminuido en parte gracias a un mayor nivel de inversión en las fuerzas de seguridad. En Haití, la violencia de las bandas se desbordó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. La Policía Nacional Haitiana, mal equipada y con es-

Cuadro 1 Estado de la transformación política

Democracias en consolidación	Democracias defectuosas	Democracias altamente defectuosas	Autocracias moderadas	Autocracias de línea dura
Puntuación de 10 a 8	Puntuación de <8 a 6	Puntuación de <6	Puntuación de ≥4	Puntuación de <4
Uruguay	Brasil	Perú	El Salvador	Venezuela
Chile	República Dominicana	México	Guatemala ▲	Cuba
Costa Rica	Argentina	Honduras		Nicaragua
Trinidad y Tobago	Bolivia			Haití ●
Jamaica	Colombia			
	Paraguay			
	Panamá			
	Ecuador			

La tabla sigue a las puntuaciones del BTI 2026. Los países se clasifican según la categorización de su sistema y su puntuación respectiva en la evaluación del estado de transformación política. Las flechas señalan un cambio de categoría en comparación con el BTI 2024, los puntos señalan estados fallidos.

casez de personal, es incapaz de hacer frente al sofisticado armamento de las pandillas, que han llegado a controlar alrededor del 85% de Puerto Príncipe y se han extendido a barrios de clase media que antes se consideraban relativamente tranquilos. Otros casos especialmente relevantes son los de Ecuador, donde el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023 y la toma de un canal de televisión por parte de un grupo criminal en enero de 2024 evidenciaron la escalada de la crisis de seguridad.

Varios gobiernos han recurrido a la imposición de estados de excepción, totales o parciales, como estrategia para reducir la criminalidad. Si bien este enfoque puede contribuir a una disminución de la violencia en el corto plazo, a largo plazo tiende a debilitar el Estado de derecho y no aborda las causas estructurales del delito y la violencia. El ejemplo más emblemático es El Salvador, que mantiene un estado de excepción a nivel nacional desde marzo de 2022. Aunque se informa que en 2024 la criminalidad alcanzó un mínimo histórico de 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, las detenciones se han realizado de manera arbitraria, las cárceles se encuentran gravemente hacinadas, con una ocupación que alcanza el 300% de su capacidad, y más de 8.000 personas inocentes permanecen privadas de libertad. Asimismo, se declararon estados de excepción para hacer frente a focos de criminalidad en Colombia, Ecuador, Honduras, Jamaica, Perú y Trinidad y Tobago, con resultados dispares.

Los elevados niveles de criminalidad en la región alimentan una percepción social generalizada de inseguridad y victimización, que se correlaciona positivamente con el respaldo a soluciones de mano dura y, de manera inversa, con el apoyo a la democracia y la confianza en las instituciones gubernamentales. Si bien la aprobación de la democracia como principio presenta poca variación (indicador 5.3), resulta preocupante que una proporción relativamente alta de la ciudadanía, un 16% según Latinobarómetro, esté dispuesta a aceptar un gobierno autoritario bajo determinadas circunstancias, sobre todo si se considera que en la mayoría de los países menos del 50% de la población se declara satisfecha con el funcionamiento de la democracia. El Salvador constituye un ejemplo ilustrativo. A pesar de las graves restricciones

a las libertades civiles y de las violaciones a los derechos humanos, el presidente Bukele mantiene uno de los niveles de aprobación más altos del mundo, superior al 80%, y la población salvadoreña expresa el segundo mayor grado de satisfacción con el sistema político de la región, con un 62%, solo por detrás de Uruguay.

En conjunto, el estado de la democracia no es enteramente desalentador. En particular, los procesos electorales han demostrado una notable capacidad de resiliencia incluso en contextos de profunda conflictividad política. No obstante, debilidades estructurales de larga data y desafíos crecientes asociados a la criminalidad socavan la calidad democrática y dificultan el funcionamiento efectivo de las instituciones democráticas.

Transformación económica

Si bien la mayoría de los países de la región pueden clasificarse como economías de mercado y presentan un alto grado de apertura al comercio exterior, los sistemas económicos siguen siendo frágiles en diversos aspectos y arrastran serios obstáculos estructurales. Varios países enfrentan brechas de financiamiento agravadas por un crecimiento económico moderado, la persistencia de la pobreza y elevados niveles de informalidad. Problemas es-

tructurales como la baja productividad y la debilidad de los sistemas tributarios limitan la capacidad de los gobiernos para financiar el desarrollo. Una excepción positiva es Ecuador, que cuenta con un sistema de recaudación fiscal relativamente profesional y obtiene cerca de tres cuartas partes de sus ingresos a partir de los impuestos. En la mayoría de los casos, sin embargo, la recaudación tributaria sigue siendo baja y depende en exceso de impuestos indirectos de carácter regresivo. Durante la pandemia, la deuda pública en la región superó el 70% del PIB, lo que elevó los costos de su servicio y desplazó recursos que podrían haberse destinado a la

educación y la salud. Muchas familias dependen de manera crucial de las remesas, que en 2024 representaron el 2,3% del PIB de América Latina y el Caribe, y constituyen una fuente esencial de ingresos para cubrir necesidades básicas. En varios países, especialmente en Centroamérica, las remesas cumplen además una función clave como

Varios gobiernos han recurrido a la imposición de estados de excepción, totales o parciales, como estrategia para reducir la criminalidad. Si bien este enfoque puede contribuir a una disminución de la violencia en el corto plazo, a largo plazo tiende a debilitar el Estado de derecho y no aborda las causas estructurales del delito y la violencia.

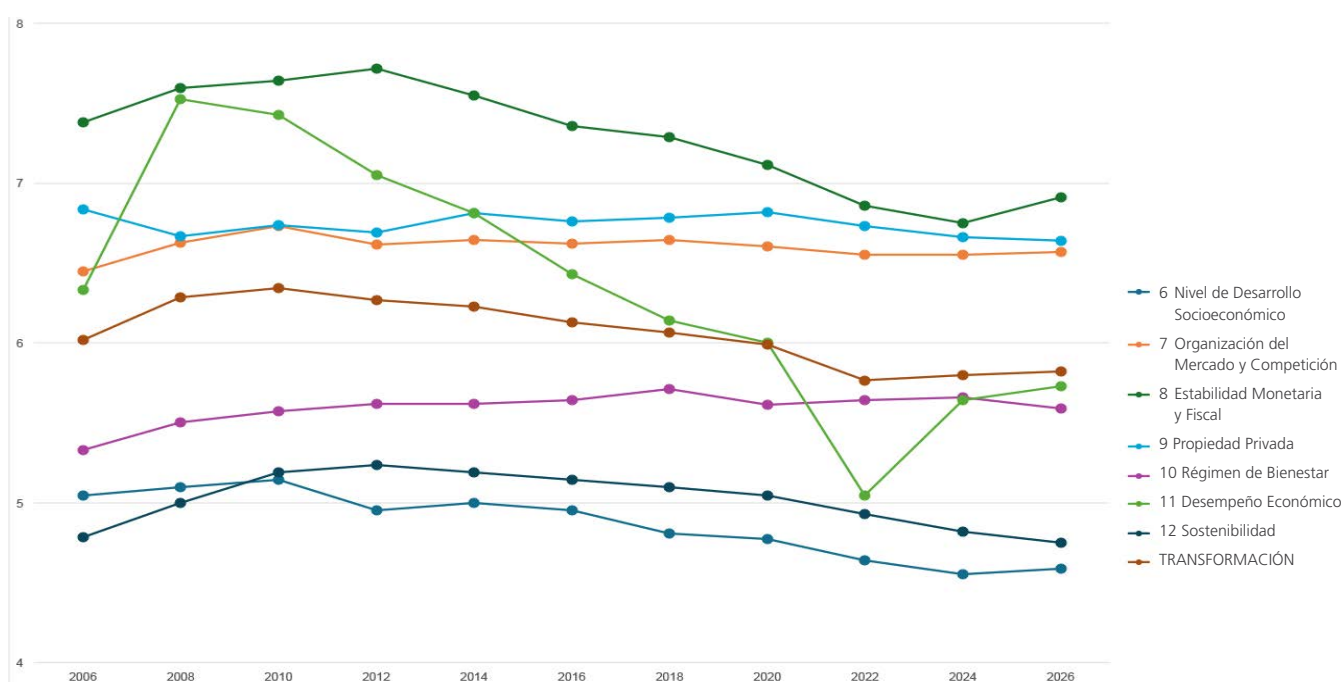
estabilizador macroeconómico. Los mercados financieros son poco profundos, con un acceso limitado al crédito y niveles de eficiencia reducidos, aunque la mayoría de los países de la región cuenta con sistemas bancarios estables. Los mercados de capitales funcionan, pero suelen estar concentrados y depender en gran medida de moneda extranjera. Para avanzar en la transformación económica, resulta imprescindible profundizar y diversificar los sistemas financieros, así como fortalecer la regulación, la educación financiera y la inclusión.

Durante el periodo analizado, el desempeño económico estuvo marcado por una progresiva normalización tras la profunda recesión provocada por la pandemia de COVID-19. En 2023, las tasas de crecimiento fueron mayoritariamente positivas, con excepción de Argentina, Cuba, Perú y, de manera más acentuada, Haití, que registró crecimiento negativo, mientras que los niveles de desempleo se situaron en mínimos históricos. La inflación se mantuvo en general bajo control, pese a que continuaron registrándose tasas elevadas en Argentina y Venezuela. En conjunto, los indicadores económicos evolucionaron de forma mayormente estable y muestran escasas variaciones en comparación con el BTI 2024, ya que los leves avances observados en algunos países se vieron compensados por retrocesos en otros (véase la Figura 3). A pesar de ciertos progresos en materia de estabilidad fiscal y monetaria, que

fue el ámbito con la mejora más marcada al registrar un aumento agregado de +0,16, persisten riesgos significativos en un contexto en el que una segunda presidencia de Trump avanza hacia el proteccionismo y la región enfrenta una creciente volatilidad en los mercados financieros.

La transformación económica presenta una gran heterogeneidad en la región, que va desde economías profundamente deterioradas, como las de Cuba, Haití y Venezuela, hasta economías de mercado altamente desarrolladas y diversificadas, como las de Chile, Costa Rica y Uruguay, con un amplio grupo de países ubicados en una categoría intermedia de economías de mercado restringidas (véase el Cuadro 2). En términos generales, las democracias tienden a mostrar un mejor desempeño económico que las autocracias en la región, aunque existe una variación considerable dentro de ambos grupos (véase la Figura 4). Si se mide a partir de la desviación estándar de los indicadores económicos, las economías de América Latina y el Caribe se han ido diferenciando en las últimas dos décadas, con una brecha creciente en el desempeño económico explicada en gran medida por el deterioro económico de Cuba y Venezuela. Otro ámbito en el que se observan tendencias divergentes es el de la sostenibilidad, donde algunos países han logrado avances significativos, en particular Chile y Uruguay, mientras que otros han experimentado retrocesos, siendo México, Nicaragua y Venezuela los casos con

Figura 3 Transformación económica en América Latina y el Caribe: BTI 2006–2026*



* Nota: incluye a Trinidad y Tobago a partir del BTI 2020.

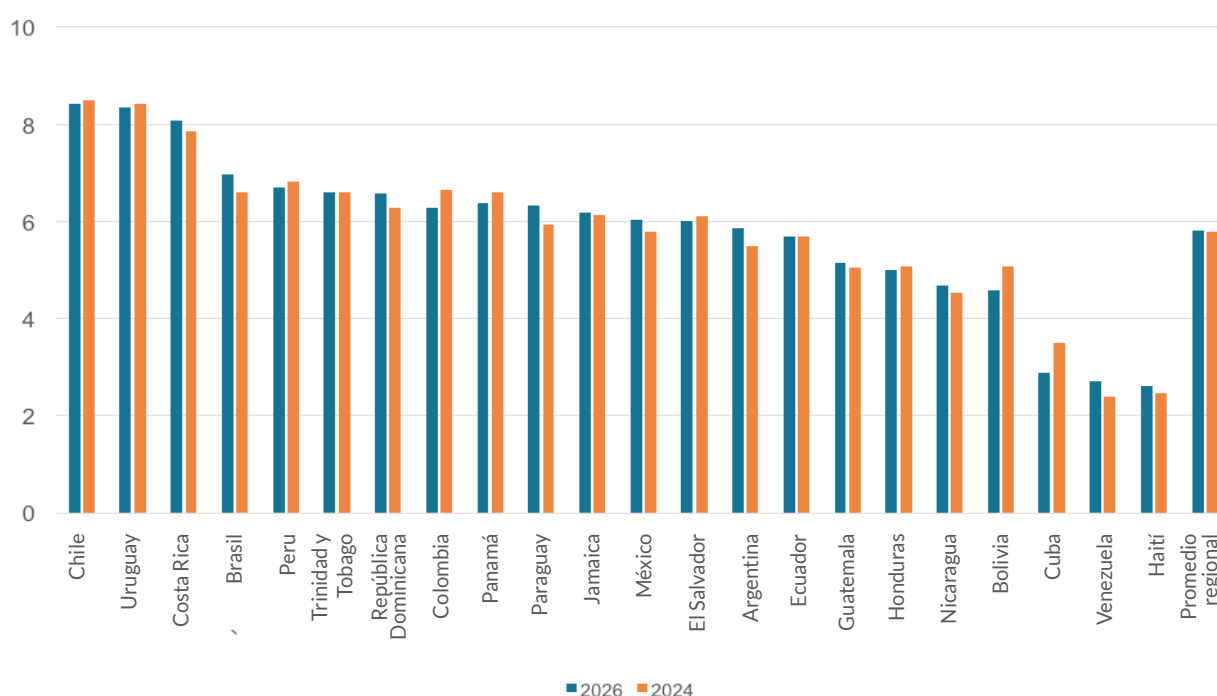
mayores caídas. En contraste, la situación resulta relativamente más homogénea en lo que respecta a los regímenes de bienestar. De manera similar, los niveles de desarrollo socioeconómico han tendido a converger en cierta medida.

Si se consideran los distintos criterios de la transformación económica, los países de América Latina y el Caribe obtienen, en general, resultados solo moderados en la mayoría de los indicadores. La mayor parte de los países muestra un desempeño relativamente sólido en aspectos como la organización de los mercados y las políticas de competencia, la estabilidad monetaria y fiscal, y la protección de los derechos de propiedad. El marco de mercado, que incluye el sistema bancario y el comercio exterior, es particularmente robusto en Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay, así como, entre los regímenes autoritarios, en El Salvador. Las democracias mencionadas reflejan modelos diversos de gobernanza económica. Chile y Uruguay combinan estabilidad institucional y de políticas públicas con niveles relativamente bajos de informalidad. Costa Rica, por su parte, prioriza la protección del consumidor y la competencia leal, aunque enfrenta dificultades persistentes en materia de empleo informal. Perú, pese a haber avanzado en una liberalización amplia, sigue limitado por una informalidad profundamente arraigada y por presiones populistas emergentes. Todos estos países, incluido El Salvador, han mantenido en términos generales

políticas económicas orientadas al mercado, aunque con diferencias significativas en cuanto a los fundamentos institucionales, el grado de intervención estatal y los niveles de informalidad.

Con excepción de Cuba y Venezuela, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe presenta un alto grado de apertura al comercio exterior, en particular Chile, Costa Rica, El Salvador y México. México sigue siendo una de las economías más abiertas del mundo, con flujos de bienes y capitales en general poco restringidos. El país se encuentra profundamente integrado al sistema comercial de América del Norte a través del T-MEC actualizado, que incorpora normas revisadas en materia de reglas de origen y disposiciones laborales. No obstante, la reelección del presidente estadounidense Donald Trump introdujo desafíos relevantes, especialmente a partir de las amenazas de imponer aranceles generales del 25% a las importaciones mexicanas, en respuesta a preocupaciones vinculadas al narcotráfico y la migración. A ello se suman recientes reformas constitucionales que limitan la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petróleo, la electricidad y el litio. Asimismo, surgieron tensiones comerciales a raíz de la prohibición impuesta por México a la importación de maíz genéticamente modificado. El Salvador, por su parte, mantiene un régimen comercial altamente liberalizado, moldeado por compromisos de larga data con la

Figura 4 Transformación económica en América Latina y el Caribe: BTI 2024 vs. BTI 2026



Organización Mundial del Comercio y por acuerdos regionales. Sus aranceles promedio son bajos, aunque persisten medidas de protección en sectores como el textil y el agrícola. Acuerdos recientes, entre ellos un tratado de libre comercio con China firmado en 2022 y la continuidad de reducciones arancelarias en el ámbito centroamericano, refuerzan su orientación hacia la apertura comercial.

Los países de América Latina y el Caribe también muestran, en términos comparativos, un desempeño relativamente sólido en materia de estabilidad monetaria y fiscal, con Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú a la cabeza. Durante el periodo analizado se registraron avances significativos en Argentina, donde las reformas radicales impulsadas por el gobierno de Milei lograron equilibrar el presupuesto y reducir la inflación, aunque a un elevado costo social. Milei asumió en un contexto de profunda crisis económica, con una inflación mensual del 25,5% y una amplia brecha entre el tipo de cambio oficial y el de mercado. Tras una fuerte devaluación de la moneda en diciembre de 2023 y un ajuste fiscal severo, la inflación descendió de manera considerable.

En contraste, la estabilidad monetaria y fiscal se deterioró de forma pronunciada en Colombia y Bolivia. En el caso colombiano, nuevos desafíos han puesto en cuestión su tradicional compromiso con la estabilidad macroeconómica. Debilidades estructurales de las finanzas públicas, como una limitada capacidad tributaria, la dependencia de los ingresos petroleros y las presiones de gasto derivadas de la migración venezolana, han erosionado la estabilidad presupuestaria. La agenda redistributiva del presidente Gustavo Petro ha añadido tensiones adicionales a las cuentas públicas, especialmente después de que partes clave de la reforma tributaria de 2022 fueran invalidadas. En 2024, el gobierno enfrentó un déficit fiscal creciente, estimado entre el 5,3% y el 8,4% del PIB, y se vio obligado a implementar medidas de austeridad. La resistencia del Congreso a las propuestas presupuestarias y tributarias llevó al Ejecutivo a aprobar el presupuesto de 2025 por decreto, lo que generó dudas sobre su viabilidad fiscal. En Bolivia, el panorama macroeconómico se ha deteriorado con mayor rapidez, principalmente debido a la caída de los ingresos por exportaciones de gas, una fuente clave de recursos fiscales. El déficit fiscal,

que alcanzó el 10,9% del PIB en 2023, o el 6,9% si se excluyen los subsidios, se financia mediante endeudamiento y emisión monetaria. En 2024, la inflación llegó al 9,95% y las reservas internacionales descendieron por debajo de los 200 millones de dólares, lo que pone en riesgo la capacidad del país para sostener las importaciones y cumplir con sus obligaciones de deuda.

Las economías abiertas de América Latina y el Caribe son particularmente vulnerables a los shocks externos. Los riesgos económicos se han incrementado como consecuencia de la incertidumbre geopolítica y de la creciente presencia de China en la región, simbolizada por el gran puerto construido por capitales chinos en Chancay, Perú. La guerra entre Rusia y Ucrania también ha tenido impactos en las economías regionales, aunque de manera desigual, principalmente a través de la disrupción de las cadenas globales de suministro, el refuerzo de las presiones inflacionarias y el aumento de la incertidumbre económica en países como Trinidad y Tobago. Asimismo, un retorno al proteccionismo por parte de la administración Trump podría alterar los flujos comerciales, especialmente en México y en los países de Centroamérica. Al mismo tiempo, la dependencia de la demanda china de materias primas, como el cobre, la soja y el petróleo, incrementa

los riesgos derivados de las tensiones entre Estados Unidos y China.

La protección de la propiedad privada se mantuvo relativamente estable, con solo cambios marginales en términos generales. Si bien persisten disputas en torno a los territorios ancestrales de comunidades indígenas, como ocurre en Argentina, Chile y Paraguay, así como ocupaciones ilegales en algunas zonas del Caribe, entre ellas la República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago, los derechos de propiedad están en general razonablemente bien garantizados en la región, especialmente en Chile y Uruguay, que continúan siendo los países con mejor desempeño. Durante el periodo analizado, los avances más significativos en la garantía de los derechos de propiedad se registraron en Argentina. El gobierno de Milei adoptó una orientación más favorable a los negocios y derogó las leyes de control de alquileres que previamente habían desincentivado el mercado de arrendamientos. En contraste, la protección de la propiedad se deterioró en

Durante el periodo analizado, los avances más significativos en la garantía de los derechos de propiedad se registraron en Argentina. El gobierno de Milei adoptó una orientación más favorable a los negocios y derogó las leyes de control de alquileres que previamente habían desincentivado el mercado de arrendamientos.

Honduras y Nicaragua. En Nicaragua, ello se debió principalmente a la confiscación arbitraria de bienes pertenecientes a personas e instituciones consideradas subversivas por el gobierno, así como al debilitamiento progresivo de las garantías legales para las empresas privadas. En Honduras, por su parte, persisten prácticas de corrupción a gran escala que dificultan la obtención y conservación de títulos de propiedad, junto con la presencia de organizaciones criminales y una burocracia lenta y poco transparente que obstaculiza la actividad empresarial.

Aunque la mayoría de los países de América Latina y el Caribe alcanzan niveles altos o muy altos de desarrollo humano, las desigualdades estructurales siguen obstaculizando un desarrollo socioeconómico inclusivo y debilitan los regímenes de bienestar. La pobreza continúa siendo un fenómeno extendido en la región y afecta al 27,3% de la población, mientras que el 10,4% vive en situación de pobreza extrema, según datos de la CEPAL para 2023. Haití sigue siendo el país más pobre de la región, condicionado por una inestabilidad política persistente y niveles de violencia sin precedentes, con cerca del 60% de su población por debajo de la línea de pobreza. Niveles críticamente bajos de desarrollo socioeconómico también se observan en Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, mientras que los niveles más elevados se registran en Chile, Costa Rica y Uruguay. En Brasil, la desigualdad se mantiene entre las más altas del mundo, con un coeficiente de Gini de 0,52, lo que se traduce en una reducción del 24,1% del Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad. Las brechas raciales son particularmente marcadas, ya que la mayoría de la población pobre es no blanca, mientras que la riqueza se concentra mayoritariamente en la población blanca. Si bien los programas sociales han contribuido recientemente a reducir la pobreza y la pobreza extrema, los avances siguen siendo desiguales. De manera similar, Colombia y México han registrado mejoras en los últimos años, aunque amplios sectores de la población continúan enfrentando situaciones de pobreza, especialmente en comunidades rurales y marginadas. En México, la reducción reciente de la pobreza ha estado impulsada en gran medida por el aumento de los salarios, aunque el debilitamiento de las instituciones de monitoreo social genera preocupación. Si bien la desigualdad de género muestra una tendencia gradual a la baja, persisten

barreras estructurales significativas, particularmente en contextos atravesados por conflictos.

Las políticas sociales resultan, en la mayoría de los casos, insuficientes para corregir las desigualdades estructurales y garantizar la igualdad de oportunidades. Como muestra la Figura 3, la calidad de los sistemas de bienestar es, en promedio, moderada, y el indicador correspondiente registró una caída regional de -0,07. Estos sistemas se encuentran subfinanciados, presentan marcadas disparidades en términos de calidad y acceso, y muestran deficiencias persistentes en su gestión administrativa. En muchos países, la cobertura sanitaria es casi universal desde el punto de vista legal, pero esta condición en la práctica no siempre se traduce en un acceso real. Los sistemas públicos de salud permanecen altamente segmentados y combinan servicios universales financiados con recursos públicos, instituciones de seguridad social destinadas a la población con empleo formal y proveedores privados. Una fragmentación similar se observa en los sistemas de pensiones, que incluyen esquemas públicos de reparto, con una cobertura que oscila entre el 30% y el 50% de la fuerza laboral, regímenes no contributivos, como los existentes en Bolivia y Brasil, y cuentas de capitalización administradas por el sector privado, que desempeñan un papel predominante en Chile. Las prestaciones por desempleo continúan siendo limitadas en la mayoría de los países de la región, lo que restringe la capacidad de protección frente a shocks económicos. No obstante, existen programas focalizados orientados a los sectores más vulnerables, como Bolsa Familia en Brasil, que han contribuido a mitigar parcialmente los efectos de la pobreza y la exclusión social.

No se registraron avances significativos en los sistemas de protección social; por el contrario, en Argentina el financiamiento de los programas sociales y de las organizaciones intermedias se redujo de forma drástica como consecuencia de las políticas de austeridad del gobierno. En Cuba, desde la pandemia y tras el fallido proceso de reforma monetaria de enero de 2021, el número de personas que viven en situación de pobreza extrema o enfrentan condiciones de vida precarias ha aumentado de manera pronunciada. Los servicios de salud y educación se han deteriorado hasta niveles críticos, con una escasez generalizada de recursos materiales y medicamentos. En este

En México, la reducción reciente de la pobreza ha estado impulsada en gran medida por el aumento de los salarios, aunque el debilitamiento de las instituciones de monitoreo social genera preocupación.

contexto, los vínculos familiares con la diáspora y el acceso a divisas a través de las remesas se han vuelto esenciales para la supervivencia cotidiana, aunque benefician de manera desproporcionada a la población blanca, lo que deja a las personas afrodescendientes en una situación de desventaja estructural. En términos generales, los regímenes de bienestar en América Latina y el Caribe han mostrado escasa variación en las últimas dos décadas (véase la Figura 3), lo que da cuenta de un alto grado de inercia en este ámbito. La resistencia social y política a la reforma del sistema de pensiones en Uruguay ejemplifica los costos políticos que suelen acompañar los intentos de reformar los sistemas de bienestar.

Los esfuerzos en materia de sostenibilidad también enfrentaron dificultades, con un balance general de -0,07 puntos, debido principalmente al retroceso en las políticas de educación e investigación y desarrollo (-0,18). Persisten graves deficiencias en la calidad educativa, especialmente en Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. En Honduras y Nicaragua, por ejemplo, existen serios problemas de acceso a la educación secundaria y superior, altas tasas de abandono escolar, niveles de alfabetización estancados y una creciente falta de transparencia institucional, lo que dificulta la evaluación de las políticas públicas. En el caso

de Nicaragua, el gobierno ha intensificado de manera significativa el control sobre las instituciones de educación superior y ha restringido la libertad académica. En la mayoría de los países de la región, la subfinanciación, la supervisión deficiente y la escasa capacidad de innovación continúan limitando los avances hacia sistemas educativos más equitativos y eficaces, lo que a su vez reduce el potencial de crecimiento a largo plazo.

Por su parte, la política ambiental registró avances modestos (+0,04), aunque solo Chile, Costa Rica y Uruguay alcanzan puntuaciones superiores a 7. En Chile, la protección del medio ambiente se ha consolidado como una prioridad central de la agenda pública, especialmente bajo la administración de Boric. Desde 2010, el país ha desarrollado un marco institucional amplio, que incluye la creación del Ministerio del Medio Ambiente y de diversas agencias encargadas de la evaluación y fiscalización. No obstante, la normativa ambiental entra en tensión con el modelo económico chileno, fuertemente dependiente de las industrias extractivas. Esta contradicción se hizo particularmente visible en el caso del proyecto minero Dominga, que fue paralizado tras una serie de recursos judiciales. En Uruguay, la política ambiental ha avanzado de manera sostenida, con un fuerte desarrollo de las energías re-

Cuadro 2 Evolución de la transformación económica

Muy avanzado	Avanzado	Limitado	Muy limitado	Rudimentario
Puntuación de 10 a 8	Puntuación de <8 a 7	Puntuación de <7 a 5	Puntuación de <5 a 3	Puntuación de (<3)
Chile		Brasil	Nicaragua	Cuba ▼
Uruguay		Perú	Bolivia ▼	Venezuela
Costa Rica ▲		Trinidad y Tobago		Haití
		República Dominicana		
		Panamá		
		Paraguay		
		Colombia		
		Jamaica		
		México		
		El Salvador		
		Argentina		
		Ecuador		
		Guatemala		
		Honduras		

La tabla sigue las puntuaciones del BTI 2026. Los países se clasifican según su puntuación respetiva en la evaluación del estado de transformación económica. Las flechas marcan un cambio de categoría en comparación con el BTI 2024.

novables que sitúa al país en el puesto 21 a nivel mundial en términos de transición energética. La creación del Ministerio de Ambiente en 2020 constituyó un hito relevante en este proceso, aunque iniciativas como la instalación de plantas de celulosa o el plan hídrico para Montevideo han generado una importante oposición ambiental. En términos generales, la dependencia de las exportaciones de materias primas dificulta la conciliación entre sostenibilidad y crecimiento económico en la región. En este sentido, las intenciones del presidente de Costa Rica de explorar reservas de gas natural ponen en riesgo la reputación histórica del país como referente regional en políticas ambientales. En México, el debate en torno a la fractura hidráulica se ha intensificado en los últimos años, reflejando las tensiones entre la búsqueda de independencia energética, las preocupaciones ambientales y las presiones económicas.

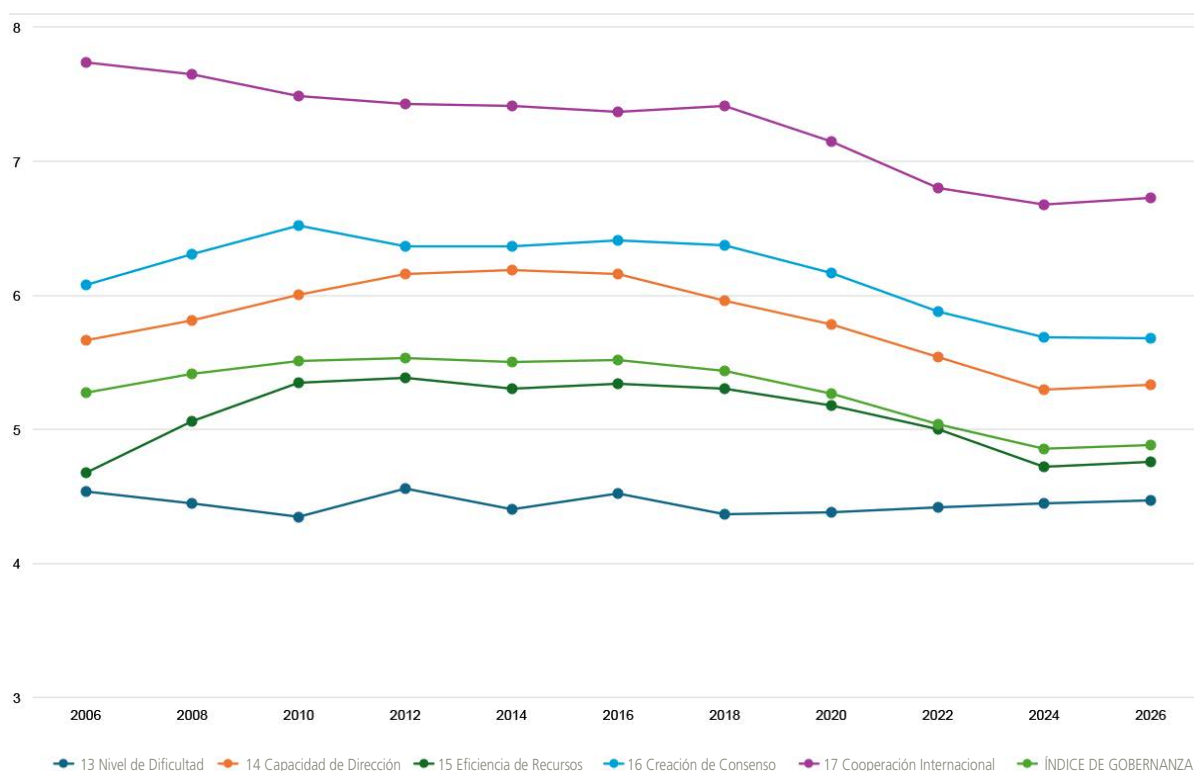
Las perspectivas de la transformación económica se ven ensombrecidas por debilidades estructurales persistentes y por la volatilidad del entorno internacional. Si bien la situación actual de las economías de América Latina y el Caribe es heterogénea, la región enfrenta claras limitaciones para sostener el crecimiento. Entre 2015 y 2024, la tasa de crecimiento anual promedio se situó por debajo del 1%, menos de la mitad de la registrada durante la llamada “dé-

cada perdida” de los años ochenta, según la CEPAL. Para preparar a la fuerza laboral de cara a una economía más dinámica, los países no solo deben incrementar la inversión en educación, sino también garantizar que las oportunidades educativas y profesionales sean accesibles para toda la población. Asimismo, resulta fundamental crear empleos formales de calidad para hacer frente al desempleo juvenil y alejar a las y los jóvenes de dinámicas delictivas. Alcanzar avances sociales sustantivos requiere la conformación de una coalición amplia a favor de las reformas, lo que implica no solo voluntad política, sino también un entorno institucional estable y condiciones externas favorables.

Gobernanza

La calidad de la gobernanza en América Latina y el Caribe refleja en gran medida el estado de la transformación democrática y económica, ya que las calificaciones en estas tres dimensiones muestran una fuerte correlación. Los países que encabezan el Índice de Estado, Uruguay, Chile y Costa Rica, también presentan los mejores desempeños en el Índice de Gobernanza, mientras que Haití, Nicaragua y Venezuela se sitúan de manera sistemática en los últimos lugares (véase el Cuadro 4). En comparación con

Figura 5 Gobernanza en América Latina y el Caribe: BTI 2006–2026*



* Nota: incluye a Trinidad y Tobago a partir del BTI 2020.

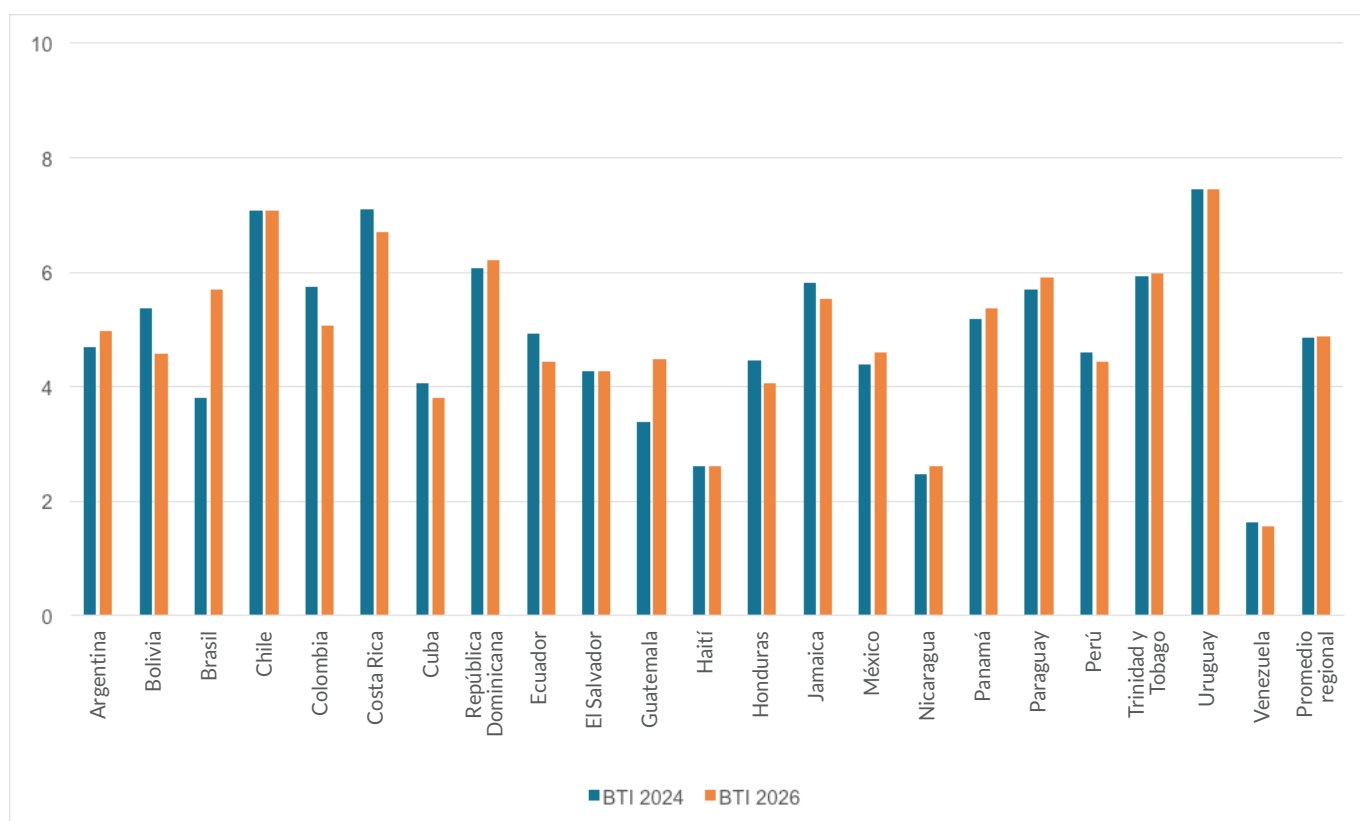
el periodo de evaluación anterior, la mayoría de los países mantuvo para el BTI 2026 su nivel de calidad de gobernanza, generalmente moderado. Solo dos países, Brasil (+1,89) y Guatemala (+1,10), registraron mejoras significativas en sus puntuaciones.

No obstante, el análisis desagregado revela no solo patrones comunes, sino también trayectorias divergentes. El nivel de dificultad apenas ha variado. Si bien la gobernanza en la región se ve, en términos generales, menos condicionada por factores estructurales que el promedio mundial, algunos países continúan gravemente afectados. En Haití, la violencia de las bandas y la inestabilidad política han provocado desplazamientos masivos de población y el colapso de los servicios básicos. Aunque se han registrado ciertos avances en la gestión del riesgo de desastres, las amenazas ambientales y de salud pública, como el cólera, siguen siendo motivo de seria preocupación. Otros países, entre ellos Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay, enfrentan también desafíos estructurales profundamente arraigados, como la persistencia de la pobreza, un crecimiento económico limitado y una débil capacidad estatal. A ello se suma la fragilidad de las tradiciones de la sociedad civil y la profundidad de las

fracturas sociales, factores que merman la capacidad de gobernanza. El potencial de conflicto se ve reforzado, además, por la brecha urbano-rural presente en muchos países, así como por la reaparición de conflictos asociados a procesos de transformación no resueltos del pasado autoritario, como ocurre en Argentina y Brasil.

En el conjunto de la región, la tasa de pobreza se redujo en más de cinco puntos porcentuales y alcanzó el 27,3% en 2023, frente a los niveles registrados en 2020 durante la pandemia de COVID-19, lo que constituye la cifra más baja jamás reportada por la CEPAL. No obstante, esta mejora se explica en gran medida por la evolución positiva en Brasil, país que concentra cerca de un tercio de la población regional y donde los programas de transferencias monetarias condicionadas han tenido un impacto decisivo en la mejora de las condiciones sociales. En términos generales, la desigualdad de ingresos y la falta de protección social siguen siendo elevadas. La pobreza crónica, que mantiene a las personas atrapadas en ciclos persistentes de privación, continúa siendo un desafío central, dado que una de cada siete personas vive en situación de pobreza extrema. En la región, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes son los grupos más afectados por la pobreza.

Figura 6 Gobernanza en América Latina y el Caribe: BTI 2024 vs. BTI 2026



Muchos gobiernos no logran gestionar las reformas de manera eficaz, lo que dificulta el cumplimiento de prioridades de política pública a largo plazo, como lo refleja la puntuación media relativamente baja en capacidad de conducción política (5,35). Las ineficiencias institucionales limitan en gran medida la definición de prioridades claras. En Ecuador, la altísima rotación de ministros y altos funcionarios ha socavado la continuidad y el profesionalismo de la administración pública, como quedó en evidencia durante la crisis eléctrica de 2023 y 2024. La falta de profesionalización administrativa y de continuidad también afecta a países como México, Panamá y Perú, donde la contratación y destitución de personal administrativo suele responder a motivaciones políticas. En contraste, Argentina y Brasil destacan por mejoras significativas en la definición de prioridades y la coordinación de políticas. En Argentina, el gobierno de Milei se centró desde el inicio en la estabilización económica, al tiempo que otorgó prioridad a la seguridad y la reducción del delito. A pesar de contar con un poder legislativo limitado, Milei logró avanzar en aspectos clave de su agenda, en particular mediante la aprobación de un amplio paquete de reformas, la llamada “Ley Ómnibus”, en junio de 2024, y la firma de un pacto económico con los gobernadores provinciales. Estos logros legislativos sentaron las bases para la implementación de severas medidas de austeridad orientadas a reducir la inflación y equilibrar las cuentas públicas. En Brasil, la administración de Lula priorizó el crecimiento económico, la creación de empleo, la igualdad de género, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental a través de reformas fiscales y tributarias. No obstante, la implementación de las políticas ha sido desigual debido a la fragmentación y polarización del Congreso. Aunque se aprobaron algunas reformas clave, como las leyes tributarias y sobre redes sociales, el bloqueo legislativo continúa obstaculizando con frecuencia las iniciativas del gobierno.

En Guatemala, el gobierno de Arévalo ha mostrado un mayor compromiso que las administraciones anteriores con el establecimiento y la preservación de prioridades estratégicas. Entre los principales logros de su primer año de gestión se incluyen inversiones significativas en programas sociales, desarrollo de infraestructura y políticas orientadas a la reducción de la pobreza. La administración apuesta por la innovación y la flexibilidad en el diseño de

políticas, con el objetivo de modernizar la administración pública y promover procesos de toma de decisiones más inclusivos. En este marco, el gobierno adopta un enfoque de “aprender haciendo”, ajustando las políticas a partir de los resultados obtenidos y de experiencias previas, especialmente en ámbitos como la lucha contra la desnutrición crónica. Si bien se han iniciado esfuerzos para institucionalizar la innovación, persisten desafíos derivados de la limitada coordinación interinstitucional y de la resistencia del Congreso. La sostenibilidad de estas prioridades dependerá de la capacidad del gobierno para superar los bloqueos políticos, fortalecer las capacidades institucionales

y asegurar el apoyo financiero externo necesario para proyectos de desarrollo de largo plazo. También en Ecuador se han puesto en marcha estrategias innovadoras de implementación y evaluación de políticas, en particular el sistema de “Gobierno por Resultados”, orientado al seguimiento de las políticas públicas y del funcionamiento de la burocracia, aunque su alcance se vio restringido por limitaciones presupuestarias. En Uruguay, por su parte, especialistas desempeñaron un papel

central en el diseño de las reformas en educación y seguridad social, que se elaboraron a partir de aportes técnicos y de amplios consensos políticos, lo que refleja un alto nivel de coordinación en la formulación de políticas públicas.

Sin embargo, en muchos casos la calidad de la gobernanza sigue viéndose afectada por una coordinación deficiente y por la resistencia de intereses arraigados. En Panamá, por ejemplo, la élite empresarial ejerce una influencia considerable sobre la política, con numerosos intereses privados estrechamente vinculados a contratos estatales. La frontera entre la autoridad pública y el poder corporativo se diluye con frecuencia, pese a la existencia de instituciones regulatorias y democráticas relativamente sólidas, lo que mantiene latente el riesgo de captura del Estado. Amenazas más directas a la gobernanza democrática se observan en países donde las fuerzas armadas intervienen de manera indebida en los asuntos políticos, donde operan con fuerza organizaciones criminales o grupos guerrilleros, o donde las instituciones han sido cooptadas por redes de corrupción. Aunque Guatemala registró una de las mejoras más pronunciadas en el desempeño de la gobernanza, con un aumento de +1,20 solo por detrás de Brasil (+2,23), actores profundamente enquistados continúan

La frontera entre la autoridad pública y el poder corporativo se diluye con frecuencia, pese a la existencia de instituciones regulatorias y democráticas relativamente sólidas, lo que mantiene latente el riesgo de captura del Estado.

obstaculizando los cambios al statu quo. El principal freno a la agenda reformista ha sido la fiscal general María Consuelo Porras, quien ha socavado activamente investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, además de impulsar procesos judiciales basados en acusaciones infundadas y de motivación política. No obstante, las próximas elecciones para designar a una nueva fiscal general y a otras figuras clave del sistema judicial en 2026 representan una oportunidad decisiva para fortalecer el Estado de derecho y avanzar en la agenda de reformas democráticas impulsada por el presidente Arévalo.

En la mayoría de los países existe un amplio consenso entre los actores clave en torno a los principios básicos de la democracia y la economía de mercado; sin embargo, la interpretación práctica de estos principios suele ser objeto de disputa. La necesidad de equilibrar objetivos de política pública en conflicto plantea desafíos permanentes y con frecuencia genera dilemas de gran calado. Por ejemplo, las estrategias para combatir la criminalidad suelen implicar restricciones a las libertades civiles que no siempre resultan proporcionales a las amenazas reales. En muchos contextos, trazar una línea clara entre la acción legítima del Estado y el abuso de poder por parte del Ejecutivo resulta complejo. En El Salvador, esa línea ha sido claramente traspasada hacia formas de represión autoritaria. En otros casos, los propios actores involucrados en el proceso de formulación de políticas persiguen objetivos contradictorios. En Jamaica, la escasa coordinación interinstitucional y la coexistencia de políticas gubernamentales divergentes socavan la eficacia de la acción pública. Mientras se impulsan iniciativas para fortalecer la agricultura local y el empleo rural, otros programas fomentan la migración de agricultores al extranjero y permiten la importación de alimentos libres de aranceles para el sector turístico, lo que contrarresta esos mismos objetivos. En Bolivia, las divisiones internas dentro del MAS han debilitado gravemente la capacidad del gobierno de Arce para implementar y coordinar políticas, lo que lo ha llevado a ceder ante diversas presiones sociales, como autorizar la deforestación en áreas protegidas y aceptar ingresos fiscales mínimos provenientes de la minería del oro.

Muchos gobiernos también tienen dificultades para abordar de manera eficaz las fracturas sociales. En lugar

Muchos gobiernos también tienen dificultades para abordar de manera eficaz las fracturas sociales. En lugar de tender puentes y desempeñar un papel moderador, con frecuencia contribuyen a profundizar los conflictos existentes.

de tender puentes y desempeñar un papel moderador, con frecuencia contribuyen a profundizar los conflictos existentes. En este sentido, los actores populistas tienden a exacerbar las tensiones y la polarización. Argentina constituye un ejemplo claro, ya que el presidente Milei recurre a una retórica divisiva y a las llamadas guerras culturales para movilizar a su base de apoyo. En Brasil, el escenario político continúa estando fuertemente polarizado, aunque el gobierno de Lula ha realizado esfuerzos significativos para evitar una mayor escalada de los conflictos sociales.

En los regímenes autoritarios de la región, las divisiones sociales y políticas son explotadas activamente como parte de la estrategia de poder de los gobernantes. Nicaragua, por ejemplo, permanece profundamente polarizada entre sectores sandinistas y antisandinistas, en gran medida como resultado de la represión sostenida ejercida por el gobierno de Ortega. Las expectativas de que las elecciones de 2021 condujeran a una apertura política se vieron frustradas cuando el FSLN intensificó la perse-

cución de la oposición. En términos generales, en muchos países predomina una lógica de competencia política de suma cero, en la que los actores políticos tienden a agudizar las divisiones existentes en busca de beneficios políticos de corto plazo.

América Latina y el Caribe también presentan ámbitos de fortaleza en materia de gobernanza, en particular en lo que respecta a la cooperación internacional, con una puntuación promedio regional relativamente alta de 6,73, lo que refleja la disposición y la capacidad de los países para cooperar con organizaciones y gobiernos externos. Brasil, en particular, ha retomado un papel de actor cooperativo y creíble en las relaciones internacionales. Bajo el liderazgo de Lula, el país volvió a comprometerse con el Acuerdo de París y reafirmó su apuesta por el desarrollo sostenible. Otros ejemplos positivos son Costa Rica, la República Dominicana, Jamaica, Paraguay y Trinidad y Tobago, que han demostrado capacidad para integrar la asistencia internacional en estrategias coherentes de desarrollo a largo plazo, en ámbitos que van desde la sostenibilidad ambiental hasta la reforma económica y la innovación digital. No obstante, también se observan retrocesos en algunos países en relación con la cooperación internacional. En Colombia, por ejemplo, el país fue suspendido temporalmente del Grupo Egmont, una organización internacional dedi-

Cuadro 4 Calidad de la gobernanza

Muy buena	Buena	Moderada	Débil	Fallida
Puntuación de 10 a 7	Puntuación de <7 a 5,6	Puntuación de <5,6 a 4,3	Puntuación de <4,3 a 3	Puntuación de <3
Uruguay	Costa Rica ▼	Jamaica ▼	El Salvador	Haití
Chile	República Dominicana	Panamá	Honduras ▼	Nicaragua
	Trinidad y Tobago	Colombia ▼	Cuba	Venezuela
	Paraguay	Argentina		
	Brasil ▲▲	México		
		Bolivia		
		Guatemala ▲		
		Perú		
		Ecuador		

La tabla muestra las puntuaciones del BTI 2026. Los países se clasifican según su puntuación respectiva en el Índice de Gobernanza. Las flechas marcan un cambio de categoría en comparación con el BTI 2024.

cada a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, tras la divulgación por parte del presidente Petro de información clasificada sobre el software Pegasus. En Argentina, el gobierno de Milei ha adoptado una postura escéptica y selectiva frente a las organizaciones internacionales y el multilateralismo, priorizando las relaciones bilaterales por sobre una participación activa en los ámbitos regional y multilateral. En conjunto, los países de América Latina y el Caribe tienden a mostrarse cooperativos en los niveles internacional y regional y a utilizar la asistencia externa para avanzar en sus objetivos de desarrollo, aunque las debilidades institucionales limitan la eficacia de ese apoyo. A ello se suma un entorno internacional cada vez más incierto, marcado por tensiones geopolíticas y por la retirada progresiva de la USAID, que plantea desafíos emergentes tanto para la integración regional como para la capacidad de la región de fortalecer su posición política y económica en el sistema internacional.

Pese a una leve disminución con respecto al BTI 2024 (-0,14), el nivel de cooperación a escala regional sigue siendo elevado, con una puntuación promedio de 7. No obstante, cuestiones como la migración y la posición frente a los regímenes autoritarios de la región constituyen focos potenciales de conflicto. Mientras que los gobiernos de orientación conservadora tienden a minimizar los déficits democráticos en El Salvador, los gobiernos de izquierda suelen mostrarse indulgentes frente al autoritarismo en Venezuela y Nicaragua. Esta dinámica se modificó recientemente, cuando la mayoría de los gobiernos, independientemente de su orientación política, se negó a reconocer las elecciones

fraudulentas en Venezuela. En respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro exigió la retirada de los representantes de Argentina, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay, alegando sus “acciones y declaraciones injerencistas”. Sin embargo, no todos los regímenes autoritarios presentan una baja disposición a la cooperación regional. El Salvador, por ejemplo, obtiene una puntuación relativamente alta en este indicador, ya que el presidente Bukele promueve activamente la integración de los países de Centroamérica. Incluso más allá de la región centroamericana, su elevada popularidad interna y su postura de mano dura frente al crimen le han permitido ejercer una influencia política creciente.

Por lo general, América Latina y el Caribe registraron cierta mejora en la calidad de la gobernanza durante el periodo analizado, especialmente en el caso de Brasil. No obstante, cerca de la mitad de los países evaluados experimentó un deterioro en el Índice de Gobernanza. Desafíos emergentes, como la reducción de la ayuda externa y los flujos migratorios, junto con debilidades persistentes, entre ellas la corrupción, los bloqueos institucionales y la falta de definición de prioridades o de coordinación, siguen limitando la eficacia de la gobernanza. Enfrentar estos retos requiere un enfoque multidimensional que combine la profesionalización de la administración pública con el fortalecimiento de las condiciones institucionales necesarias para un aprendizaje efectivo de políticas y una mejor coordinación. Al mismo tiempo, el impulso de la cooperación regional e internacional resulta clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Perspectivas

A medida que América Latina y el Caribe atraviesan la mitad de la década de 2020, los países de la región se mueven en una coyuntura especialmente frágil, marcada por la polarización política, la incertidumbre económica y una elevada vulnerabilidad ambiental. Si bien los regímenes electorales han demostrado, en términos generales, una notable resiliencia en los sistemas democráticos, debilidades estructurales de larga data y desafíos emergentes ponen a prueba la solidez de las instituciones democráticas. La corrupción persistente, la impunidad, las desigualdades económicas y sociales, junto con el aumento de la criminalidad y la violencia, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y alimentan el atractivo de propuestas populistas. Los liderazgos populistas, que con frecuencia emergen al margen de los sistemas de partidos tradicionales, capitalizan el creciente malestar social ofreciendo respuestas simplificadas a problemas estructurales profundamente arraigados y a la sensación generalizada de inseguridad. Una vez en el poder, estos liderazgos tienden a intensificar la polarización, debilitar las instituciones democráticas y, en muchos casos, muestran una capacidad limitada para definir, sostener e implementar soluciones de política pública de largo plazo.

Las principales potencias regionales, Argentina y Brasil, enfrentan tanto desafíos económicos como políticos. Argentina representa el experimento más visible de la región en materia de gobernanza libertaria radical. El presidente Milei, elegido sobre la base de una plataforma de “terapia de choque” económica y un marcado discurso antisistema, ha dejado de lado los mecanismos tradicionales de formulación de políticas para privilegiar el uso de decretos ejecutivos y la confrontación cultural. Si bien ha logrado mejoras macroeconómicas de corto plazo, sus reformas han profundizado la desigualdad social y han eludido al poder legislativo, lo que genera preocupaciones en torno a un posible retroceso democrático. En Brasil, los riesgos son más conocidos, pero no por ello menos significativos. El presidente Lula ha reafirmado el papel del país como actor regional de peso y como referente en materia ambiental, en particular en el debate global sobre el cambio climático. No obstante, su gobierno enfrenta una fuerte oposición en el Congreso, un ritmo lento de refor-

mas y la posibilidad de un nuevo ciclo de inestabilidad política si Jair Bolsonaro o sus aliados regresan al escenario electoral en 2026. El recuerdo de la insurrección de enero de 2023 pone de manifiesto la fragilidad de los avances democráticos de Brasil en un contexto de creciente polarización política.

La incertidumbre económica y política es especialmente elevada en Bolivia. Durante años dependiente de las exportaciones de gas, el país se encuentra ahora en un punto crítico. A medida que las reservas se agotan y la deuda aumenta, el gobierno se enfrenta a un escenario económico límite, mientras que los principales actores políticos es-

tán absorbidos por las luchas internas de poder dentro del MAS. Otros países, como Honduras y Guatemala, presentan versiones crónicas del deterioro democrático, caracterizadas por instituciones débiles, sistemas de partidos fragmentados y gobiernos con capacidades limitadas para hacer frente a la violencia generalizada, la pobreza o la corrupción. Aun así, Guatemala registró avances en la mayoría de los indicadores durante el periodo analizado,

en gran medida gracias al nuevo liderazgo del presidente Arévalo. Sin embargo, un Congreso fragmentado y la resistencia a las reformas democráticas por parte de intereses políticos y económicos profundamente arraigados imponen serias limitaciones a su agenda reformista. Asimismo, Centroamérica y algunos países del Caribe continúan dependiendo en gran medida de las remesas y de la ayuda proveniente de Estados Unidos, lo que los hace especialmente vulnerables a una postura más dura de la administración Trump en materia migratoria y de cooperación regional. Incluso en un país considerado exitoso como Chile, que obtiene puntuaciones altas en la mayoría de los indicadores, predomina un clima de desilusión. Año presentado como la democracia más estable de América Latina, el país ha atravesado dos procesos fallidos de reforma constitucional y sigue atrapado en un prolongado estancamiento político. La fragmentación tanto de la izquierda como de la derecha ha vaciado el centro político, abriendo espacio para el ascenso de fuerzas más duras, especialmente en el espectro conservador.

En toda la región, el crimen organizado, el narcotráfico y la debilidad de las instituciones estatales convergen para generar una crisis de seguridad interna persistente y, en muchos casos, en agravamiento. Haití destaca como

En toda la región, el crimen organizado, el narcotráfico y la debilidad de las instituciones estatales convergen para generar una crisis de seguridad interna persistente y, en muchos casos, en agravamiento.

un Estado fallido al borde del colapso, que durante el periodo analizado ha perdido un control territorial significativo a manos de las bandas criminales. Sin medidas urgentes para reconstruir las fuerzas policiales, restablecer el control del territorio y combatir la corrupción, cualquier intento de estabilización económica y política queda prácticamente bloqueado. Los sucesivos gobiernos de transición no han logrado contener el deterioro de la situación de seguridad ni organizar elecciones, en un contexto marcado además por una profunda crisis económica, reflejada en un crecimiento negativo por sexto año consecutivo en 2024 y en elevados niveles de pobreza. En varios países, el crimen organizado se ha convertido de facto en una estructura de poder paralela que desafía la autoridad del Estado. México y el Triángulo Norte continúan siendo focos críticos de actividad de carteles, extorsión y violencia de pandillas. Ecuador, que hasta hace poco era considerado un país relativamente seguro, enfrenta también una escalada de violencia a medida que sus puertos y fronteras se consolidan como nodos clave de las rutas globales del narcotráfico. Brasil, por su parte, sigue lidiando con una violencia urbana profundamente arraigada, especialmente en Río de Janeiro y São Paulo, donde milicias y organizaciones criminales ejercen un control territorial significativo. En Argentina y Chile, el crimen organizado tiene una presencia menos extendida, pero en claro crecimiento; ciudades como Rosario han experimentado un aumento marcado de la violencia vinculada al narcotráfico. En Chile también, el debate público se ha desplazado crecientemente hacia la seguridad interna, con la inmigración y el aumento del delito entre los principales temas de la agenda política, alimentando discursos de línea dura y apelaciones populistas. El panorama de seguridad se ve aún más complejizado por factores externos. Las organizaciones criminales transnacionales muestran una capacidad creciente de adaptación, utilizando plataformas digitales, criptomonedas y redes de tráfico ampliadas que incluyen a Europa y Asia. Sin una inversión sustantiva en los sistemas de justicia, reformas policiales profundas y políticas de inclusión socioeconómica, la región corre el riesgo de una mayor consolidación del poder de estos grupos. En este contexto, el riesgo más grave no es solo la violencia en sí misma, sino la normalización de la influencia criminal sobre las instituciones democráticas y el espacio público.

El Salvador constituye un caso singular en el que la legitimidad electoral y los avances en materia de seguridad han servido de base para la consolidación de un régimen cada vez más iliberal.

Una tendencia aún más preocupante es la profundización del autoritarismo en varios países de la región. En Venezuela, el régimen de Maduro se ha vuelto cada vez más represivo tras las elecciones fraudulentas de 2024. A pesar de una recuperación económica moderada impulsada por los ingresos petroleros y por un retorno cauteloso de la inversión extranjera, persisten las fallas estructurales del Estado rentista, lo que mantiene a más de la mitad de la población en situación de pobreza y provoca un deterioro acelerado de los servicios públicos. En Nicaragua, la consolidación autoritaria del régimen sultanístico de Ortega-Murillo se ha intensificado, eliminando toda oposición política interna mediante el exilio y la represión. Las recientes reformas constitucionales han preparado el terreno para la permanencia del poder dentro del linaje familiar Ortega-Murillo y han consagrado un control absoluto en manos de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Una enmienda constitucional creó formalmente la figura de la “copresidencia”, que Murillo ya ejercía de facto, y transfirió al matrimonio el control de los poderes legislativo, judicial y de los órganos de supervisión del Estado. Las reformas constitucionales previstas para 2025 profundizarán aún más el carácter autoritario del régimen al institucionalizar mecanismos de control centralizado y silenciar toda disidencia. En Cuba, las perspectivas de democratización parecen cada vez más lejanas en un contexto marcado por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y el abandono del diálogo en favor de estrategias de máxima presión. Incluso reformas limitadas o una mayor expansión del sector privado son percibidas por el régimen cubano como posibles “caballos de Troya” para un cambio de régimen impulsado desde Estados Unidos.

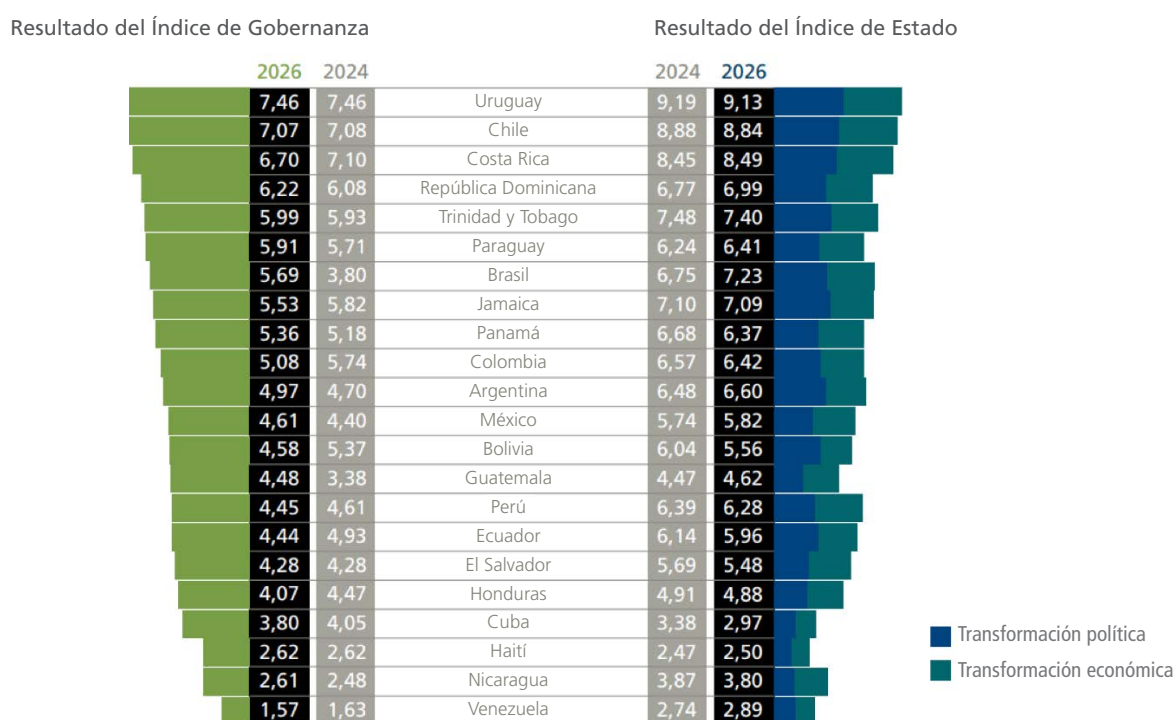
El Salvador constituye un caso singular en el que la legitimidad electoral y los avances en materia de seguridad han servido de base para la consolidación de un régimen cada vez más iliberal. El presidente Bukele ha desmantelado los contrapesos institucionales y concentrado el poder bajo el argumento de una gobernanza eficaz. Aunque la violencia de las pandillas se ha reducido de forma drástica, si bien la fiabilidad de las cifras de homicidios es objeto de debate, ello ha ocurrido a costa de las libertades civiles y de la independencia judicial. En contraste, Guatemala, bajo la presidencia de Arévalo, ofrece una ventana poco común pero frágil de renovación democrática.

En conjunto, las perspectivas de corto plazo para la democratización en los regímenes autoritarios de la región siguen siendo poco alentadoras, ya que la mayoría de estos sistemas muestra una capacidad creciente de resiliencia basada en la represión, la cooptación y la manipulación institucional. No obstante, existen oportunidades, aunque limitadas, para aperturas graduales en contextos como Venezuela y, potencialmente, en las fisuras de la cohesión interna de las élites nicaragüenses. En el caso venezolano, una estrategia calibrada que combine un alivio selectivo de sanciones, mediación regional y apoyo a la unidad de la oposición podría generar avances, aunque las expectativas deben mantenerse contenidas mientras el régimen conserve su cohesión interna. Aun así, el compromiso internacional sostenido, el diálogo estratégico y el apoyo de largo plazo a la sociedad civil y a los actores reformistas en el exilio siguen siendo elementos fundamentales para preservar incluso posibilidades modestas de democratización.

El contexto internacional complica aún más los procesos de reforma y transformación. El regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos se perfila como un factor de peso, especialmente para los países dependientes de la inversión, el comercio, la asistencia humanitaria y militar, o la diplomacia estadounidense. En 2023, Colombia y Haití fueron los principales beneficiarios de los fondos de USAID. La retirada de esta agencia de Haití tuvo un impacto inme-

diato en una situación humanitaria ya de por sí catastrófica. La suspensión de la financiación estadounidense a México y al Triángulo Norte tiene implicaciones significativas para el Estado de derecho y la seguridad, dado que estos recursos estaban orientados principalmente a abordar las causas estructurales de la migración hacia Estados Unidos. Asimismo, la reducción o eliminación de la ayuda a América Latina y el Caribe deja vacíos en áreas críticas como la protección social y la salud pública. Esta situación puede empujar a los gobiernos a buscar apoyo alternativo, incluso de actores autoritarios como China, que ya está ampliando su presencia económica en la región. Si bien la participación china ofrece oportunidades económicas, también conlleva riesgos de enredos geopolíticos y de rechazo interno, ya que sus proyectos suelen marginar a proveedores y mano de obra locales. En última instancia, el futuro del desarrollo democrático en la región dependerá de la capacidad de los gobiernos para reconstruir la confianza institucional, equilibrar la disciplina fiscal con la inclusión social, enfrentar la creciente crisis de seguridad y abordar las amenazas ambientales no como cuestiones periféricas, sino como ejes centrales de la estabilidad a largo plazo. Sin estos cambios, las democracias de la región corren el riesgo de deslizarse progresivamente hacia una zona gris, ni plenamente autoritaria ni genuinamente liberal, caracterizada por la polarización, el populismo y una gestión permanente de crisis.

Figura 7 Gobernanza: BTI 2026 vs. BTI 2024





Índice de Transformación Bertelsmann 2026

BTI TRANSFORMATION INDEX **2026**

Sobre el BTI

Gobernanza en comparación internacional

Desde 2004, el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann (BTI) analiza y evalúa periódicamente la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gobernanza en 137 países en desarrollo y en transición. La evaluación se basa en más de 5.000 páginas de informes nacionales detallados que se elaboran en colaboración con más de 280 expertos de destacadas universidades y think tanks de más de 120 países.

El periodo de evaluación actual va del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2025. El BTI es el único índice comparativo internacional que mide la calidad de la gobernanza con datos propios y ofrece un análisis exhaustivo de la gestión política en los procesos de transformación.



CADAL es una fundación privada, sin fines de lucro y a-partidaria, cuya misión es promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional.

www.cadal.org

Cerrito 1266 piso 7° Of. 31 C1010AAZ. Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. ✉ centro@cadal.org • www.cadal.org

✉ [@cadal](https://twitter.com/cadal)  [fundacioncadal](https://www.instagram.com/fundacioncadal)  [cadal.org](https://www.facebook.com/cadal.org)  [cadaltv](https://www.youtube.com/cadal)